

TOMO CONOCIMIENTO, PIDO ACLARATORIA, ADVIERTO Y
PIDO NUEVA VISTA – HAGO PRESENTE HECHOS PÚBLICOS Y
NOTORIOS- REPONGO Y CONTESTO VISTA – CARÁCTER DE MI
INTERVENCIÓN, OPORTUNAMENTE NUEVA VISTA -MANIFIESTO
- SOLICITO AUDIENCIA - PROPONGO MEDIDAS -MANTENGO
RESERVAS

Señor Juez Federal Nº 3:

María Mercedes Crespi, Defensora Pública Oficial, con domicilio en mi público despacho, en estos autos "CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION S/AMPARO AMBIENTAL" (Expte. n° FCB 021076/2016), ante Ud. comparezco y digo:

I. OBJETO

1. <u>Tomo conocimiento - requiero aclaratoria (decreto del 15/3/2017, fs. 1165) - Nueva vista - Hago presente hechos públicos y notorios</u>

Vengo a tomar conocimiento del estado procesal de estas actuaciones, por remisión operada en mi público despacho el día 22/3/2017.

Asumo, en los términos del art. 150 del C.P.C.N. (de aplicación supletoria, conforme el art. 17 de la Ley 16.986), que cuento con cinco días hábiles para emitir dictamen, de la vista ordenada a fs. 1165. Sin perjuicio de ello, solicito (arts. 166, 36-6 y cc. del C.P.C.N.), que se aclare, a los fines que en lo sucesivo se eviten equívocos en la tramitación de la causa.

Por otro lado, atento a que se trata de un expediente que hoy tiene seis cuerpos y más de mil ciento cincuenta fojas, una vez que se celebren una serie de actos procesales ineludibles (sobre los que más abajo me detendré), pido que se me confiera nueva vista de las actuaciones, a los fines que pueda expedirme con más detalle sobre este pleito.

En ese orden de ideas advierto, por caso, una presentación de la tercera interesada, Porta Hnos S.A., que luce a fs. 1155/56 sin proveer a la fecha, sobre la que además no puedo pronunciarme sin el previo y necesario traslado



a la actora e incluso a la demandada, que podrán aportar elementos a esta causa sobre ese aspecto puntual.

Por otro lado, hago presente que en dos ocasiones consecutivas, los días 10 y 15 de marzo de 2017, el Presidente de la Nación se entrevistó con representantes de la firma Porta Hnos, conforme divulgación de los medios de prensa locales –uno de los cuales, aquí acompaño-. Entiendo esta circunstancia puede resultar dirimente para resolver el caso de autos.

2. <u>Contesto vista (decreto del 15/3/2017, fs. 1165) y</u> repongo (decreto del 17/3/2017, fs. 1167)

En este mismo dictamen, contesto la vista que a fs. 1165 se ordenó al Ministerio Público a mi cargo, respecto del informe producido a fs. 438-60 por el demandado Estado Nacional.

Asimismo, en tiempo y forma propios, vengo además a interponer reposición (art. 238 y cc C.P.C.N.), en contra del tercer párrafo del decreto del 17/3/2017 (fs. 1167), en cuanto dispuso "...téngase por evacuado el traslado corrido a fs. 1116 en forma extemporánea por la parte actora. En consecuencia, desglósese el escrito en cuestión, debiendo devolverse a su presentante...". Pretendo que al resolverse, se revoque dicha errónea decisión del Tribunal.

3. Hago presente - Oportunamente nueva vista (decreto del 17/3/2017, fs. 1167) - Manifiesto

El decreto del 17/3/2017 (fs. 1167), dispone traslado de la presentación de fs. 1086/1112 realizada por Porta Hnos. S.A., tercera interesada en el proceso. Al respecto, hago presente el carácter de la intervención de este Ministerio Público en autos. Se trata de un imperativo legal en función del art. 103 del Código Civil y las previsiones de la ley 27.149. Por ello solicito respecto de dicho traslado que, una vez que la actora lo haya contestado o si transcurrido el plazo no lo hubiera respondido, se me confiera nueva vista (con remisión del expediente a mi público despacho), al efecto que pueda expedirme en definitiva sobre ese particular.

Sin perjuicio de ello, es decir de la reserva para pronunciarme en la instancia procesal oportuna, estimo útil formular en este acto algunas consideraciones acerca del escrito glosado a fs. 1086-112, lo que expondré más abajo en este mismo escrito.

4. Audiencia - Propongo medidas- Reservas

Dada la trascendencia y consecuencias públicas que puede acarrear el pleito de autos, pido se fije audiencia, en los términos del art. 36 C.P.CN., según las pautas establecidas en la Acordada de la C.S.J.N. Nº 30/2007.



Solicito además que se practiquen una serie de medidas que entiendo resultarán dirimentes para su resolución.

A todo evento, mantengo reserva de caso federal.

Todo, conforme las razones de hecho y de derecho que paso a exponer.

II. HAGO PRESENTE – HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS: REUNIONES DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN CON PORTA HNOS. S.A.

El 15 de Marzo de 2017, las máximas autoridades del país en materia energética se entrevistaron en la sede del gobierno nacional con José Porta, presidente de la firma Porta Hnos S.A.

El encuentro fue divulgado por diversos medios, entre ellos por el sitio de La Voz del Interior "Agrovoz": "Macri recibió a Porta, para avanzar en el uso de las destiladoras de maíz" (ver http://www.agrovoz.com.ar/actualidad/macri-recibio-porta-para-avanzar-en-el-uso-las-destiladoras-de-maiz). La nota se inicia del siguiente modo: "...El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió este miércoles al presidente de la empresa Porta Hnos, José Porta. Durante el encuentro, realizado en Casa Rosada y del que participó el ministro de Energía Juan José Aranguren, se

analizó la utilización del alcohol que producen las destiladoras de maiz, que fabrica la empresa cordobesa, en lu mezcla con las naftas....".

Este encuentro, fue la continuación de uno anterior, mantenido el día 10 de marzo de 2017, también difundido por diversos medios masivos de comunicación, como el del sitio "Agrovoz" de La Voz del Interior: "Macri, interesado en las mini plantas de bioetanol que desarrolla Porta" (http://www.agrovoz.com.ar/actualidad/macri-interesado-en-las-mini-plantas-de-bioetanol-que-desarrolla-porta).

Entiendo que estas circunstancias relevantes pueden resultar dirimentes para el caso de autos, por lo que solicito se incorporen constancias de dichas publicaciones periodísticas en el expediente, a cuyo fin las acompaño y a sus efectos.

III. REPONGO

En tiempo y forma propios, repongo el tercer párrafo del decreto del 17/3/2017 (fs. 1167), en cuanto dispuso "...téngase por evacuado el traslado corrido a fs. 1116 en forma extemporánea por la parte actora. En consecuencia, desglósese el escrito en cuestión, debiendo devolverse a su presentante...".



Pretendo que al resolver, se revoque por contrario imperio la parte pertinente del citado decreto, dejándola sin efecto, conforme lo que seguidamente expondré. Solicito, en consecuencia, se mantenga el escrito en cuestión, y a sus efectos.

La impugnación es procedente, toda vez que se interpone de modo fundada y dentro del plazo establecido por el código de rito. En efecto, la impugnación satisface el requisito de temporaneidad, toda vez que el decreto en crisis me fue notificado el día 22/03/2017.

La reposición es procedente en este proceso de amparo, aun a falta de regulación expresa, toda vez que: a) surge del derecho a recurrir, contemplado en el art. 8, ap. 2 h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; b) no hay obstáculos en la propia ley de amparo, donde se la excluya expresamente; c) son, en esa ley, de aplicación supletoria las normas generales de procedimiento, en las que no sólo la reposición sino también otros recursos son admisibles; d) se trata, precisamente, de una vía recursiva, no de un incidente que sí está expresamente vedado por la ley de amparo (esto último, es claro, porque se pide revisión, o sea revocar por contrario imperio una decisión que agravia a mis asistidos, sin sustanciar el trámite como en un incidente); e) la rectificación de lo erróneamente decido por el mismo órgano que expidió la resolución se plantea como un instrumento para "sanear" la marcha del proceso;

g) de acogerse la reposición, el Tribunal no le genera a la demandada "agravio" alguno; h) aun quienes en doctrina no admiten la reposición en el amparo, la aceptan cuando claramente no es un incidente sino un recurso que no requiere sustanciación, como ocurre en el presente caso (ver, por todos, Rivas, Adolfo: *El amparo*, ed. La Rocca, Bs.As., 2003, págs. 558-559; Sagüés, Néstor: *Acción de amparo*, Astrea, Bs.As., 2013, págs. 541-543).

Procede la reposición, porque la extemporaneidad que entendió el Tribunal es un claro exceso de rigor formal y denota falta de razonabilidad y violación del debido proceso sustantivo.

En efecto, no existe un plazo reglado en el proceso de amparo para vistas y traslados, por lo cual no es posible establecer, taxativamente, cuál es el "término de ley" fijado a fs. 1116 a que refiere el decreto de fs. 1167 aquí impugnado.

De hecho, estrictamente, en estos procesos no solo no hay plazos de ley para un traslado o vista, sino incluso no corresponde fijarlos (en tanto los incidentes están expresamente excluidos, art. 16 Ley 16.986). Menos aún si se trata en fin de los derechos de la parte actora en autos (puesto que el plazo perentorio del amparo, debe necesariamente jugar a favor del particular actor —por los principios pro homine y favor debilies—, que es quien tiene interés en obtener una decisión protectora lo antes posible; nunca en su contra, como mayoritaria y



pacíficamente lo tienen dicho la jurisprudencia y la doctrina (ver por todos, Rivas, A. El amparo, ed. La Rocca, págs.. 464-466).

Al apenas señalar un "término de ley" que, como se dijo estrictamente no existe, debería aplicarse sin más y de modo supletorio el plazo del art. 150 C.P.C.N., por lo que en tal caso la presentación de la actora no es extemporánea. De lo contrario, no es posible conocer desde cuándo computar el plazo, pues ni el decreto en crisis ni el certificado de fs. 1167 aclaran desde cuándo entienden computable el plazo establecido a fs. 1116, si debe ser en días hábiles o corridos, en horas, etc.

De donde, la imposición de un "término de ley", no especificado ni a fs. 1116, ni al motivar el decreto de fs. 1167, es completamente discrecional y arbitraria, contraria incluso a las previsiones complementarias de la legislación vigente (art. 17 Ley 16.986 y 150 C.P.C.N.). Nótese que dicho art. 150 C.P.C.N. fija plazos amplios, salvo disposición en contrario de la ley, lo que no sucede en autos. De donde debe entenderse, a falta de regulación expresa, aplicable dicho art. 150, por la remisión de la ley de amparo (art. 17 Ley 16986).

Frente a una situación no reglada expresamente por el ordenamiento procesal, la Corte Suprema también entendió un exceso de rigor formal disponer la extemporaneidad de un escrito, en vez de una interpretación

que fuera más respetuosa del principio pro homine (C.S.J.N., en "Cardozo, Gustavo Fabián s/ recurso de casación", del 20 de junio de 2006).

Que quede claro que no pretendo aquí cuestionar en abstracto las formalidades procesales, y en suma los plazos de rigor, a modo de sentar precedentes que tornen imprevisibles los trámites corrientes ante el Tribunal, y en procesos como un amparo. Menos, en desmedro de la parte actora y que de ahora en más la o las demandadas pretendan que no tienen plazo para contestar un traslado. Por contrario, precisamente, es en favor del amparista (que busca protección judicial, y por el principio de bilateralidad atenuada) que se impone computar del modo que propugno, los plazos en cuestión.

Empero, hago presente que en autos se trató de un "traslado", ni siquiera de un recurso. Por eso, la supuesta contestación "extemporánea" no genera ni produce agravio a las restantes partes del proceso, ni dispendio jurisdiccional alguno. Tan es así, que el propio art. 150 C.P.C.N. establece que la falta de contestación no importa consentimiento alguno a las pretensiones de la contraria. Se debe tomar la respuesta al "traslado", como una opinión que vierte una de las partes en el proceso, simplemente.

Por eso, "desglosar" el escrito en cuestión aparece como una suerte de sanción, un ejercicio irrazonable de las facultades ordenatorias del Tribunal (que contemplan los arts. 36 y cc. C.P.C.N.). Estas circunstancias



conculcan el debido proceso sustantivo, no sólo por el exceso de rigor formal antes reseñado, sino en fin por lo manifiestamente injusto de la medida del Tribunal que aquí cuestiono. No se olvide, por fin, que en materia de protección de los derechos humanos, son de aplicación para los tribunales las obligaciones emergentes de los arts. 1.1., 2 y cc. de la Convención Americana de Derechos Humanos, que imponen también los deberes de respeto y garantía, a través de medidas de todo carácter. O sea, judiciales.

IV. <u>CONTESTO VISTA (DECRETO DEL 15/3/2017, FS. 1165) – MANIFIESTO RESPECTO DEL INFORME PRODUCIDO POR PORTA HNOS S.A.</u>

IV.1. Como más arriba anticipé, entiendo que las recientes reuniones de las máximas autoridades de la Nación con representantes de la firma Porta Hnos S.A., son relevantes para dirimir el pleito de autos, pues denotan una toma de posición que no es coincidente con lo expresado por la representante del Estado Nacional a fs. 438-60.

En efecto, a título sumario, la representante del Estado Nacional niega genéricamente que su parte tenga responsabilidad alguna, o màs puntualmente, que exista obligación legal de extender habilitación para que la planta de la firma Porta Hnos funcione, en los términos de la ley 26093, o que

dicha planta deba ser controlada por el Ministerio de Energía de la Nación, o que en fin exista conducta omisiva del Estado Nacional en el caso (fs. 450).

Por otro lado, se sostiene en dicho escrito (fs. 439vta.) que el análisis de la cuestión debatida en autos excede el marco de esta acción, y por contrario debe corresponder a un proceso de conocimiento. Sobre este punto, entiendo que el fallo de Cámara dictado en autos (fs. 354/358), es taxativo sobre que indudablemente esta es la vía para dirimir el objeto planteado en este proceso, y a sus consideraciones me remito por razones de brevedad.

Nacional asume -sin explicitar cómo y por qué llega a esa conclusión- que en la planta de la firma Porta Hnos no se producen biocombustibles, o a lo sumo, que dicha producción no tiene como destino el uso en o para automotores. Sin embargo admite (fs. 444), que "...restaría analizar las características de los productos que la empresa elabora ... como así también el destino de venta y/o consumo que la empresa asigna a los mismos, para luego esbozar una conclusión categórica..." Es decir, por un lado niega que allí se produzcan biocombustibles, pero por otro lado admite que es necesario conocer qué es lo que allí se elabora. Porque en fin, admite que el destino es "relevante" (fs. 444vta).



Sin embargo, una y otra vez en el escrito (fs. 444vta./445, por caso), se asume como "Indudable" que en ese sitio no se producen biocombustibles.

Además de negativas genéricas, a fs. 450 niega categóricamente que su mandante haya tomado conocimiento en el año 2015, cuando en mi anterior intervención (fs. 332 y sgtes.) acompañé (fs. 329-331) constancias que demuestran lo contrario.

Por otro lado, también se insiste en el libelo del Estado Nacional, que no existe responsabilidad de esa parte pues es necesario acreditar causalidad entre la omisión y el perjuicio (fs. 452vta-453). Ahora bien, pareciera no tenerse en cuenta, en dicho escrito, que se trata no solo de una excluyente actividad reglada por el Estado (a través de la ley 26093), sino en fin que se afecta una materia, la ambiental, de directa incumbencia estatal también.

Luego el escrito se adentra, nuevamente, en considerar que lo debatido en autos excede el marco de un proceso de amparo, sobre lo cual (como más arriba indique) se ha pronunciado en autos la Camara Federal, razones que a mi entender muestran que no es necesario que me detenga a responder esas aseveraciones.

Sì llama la atención (fs. 458vta) que el Estado Nacional afirme que en el lugar de Porta se producen alimentos y no biocombustiles. Y

ello asì, no solo por lo que màs arriba presentè como público y notorio, sino porque en fin no acompañan documental que asì lo demuestre. Aparece, al menos en ese escrito, como una mera afirmación dogmática.

El Estado Nacional solicita (fs. 459vta.) que se cite a la Municipalidad de Còrdoba como tercera interesada, a lo que nada tengo que objetar desde mi actuación en este proceso.

IV.2. Sin perjuicio que oportunamente habrè de pronunciarme sobre el informe de la tercera interesada, en la instancia procesal correspondiente, estimo útil formular en este acto algunas breves consideraciones acerca del escrito glosado a fs. 1086-112.

Al respecto, y màs allà de la voluminosa prueba aportada, las argumentaciones son similares a las del Estado Nacional. Es decir, Porta Hnos SA plantea (sucintamente) que el amparo no es la via, y que en su planta no se producen biocombustibles.

Remito entonces, a lo que precedentemente expuse, respecto de por què entiendo deben desestimarse esos argumentos, lo que estimo suficiente en esta instancia por razones de brevedad.

V. SOLICITO FIJACIÓN DE AUDIENCIA



Dada la trascendencia y consecuencias públicas que puede acarrear el pleito de autos, pido se fije audiencia, según las pautas establecidas en la Acordada de la C.S.J.N. Nº 30/2007.

Ello es posible, además, en los términos de los arts. 32 LGA, 2 de la CADH y concordantes del C.P.C.N. (art. 36).

Como ha sido público y notorio, el Alto Tribunal del país ha celebrado este tipo de audiencias, tanto informativas, de conciliación, o en fin ordenatorias, con fundamento en el principio de participación, y por la proyección e impacto en la comunidad de lo que se vaya a resolver en el caso respectivo. Así ocurrió en los caos de la llamada "Ley de Medios", "Provincia de Cba c/Estado Nacional" y "Mendoza" (Cuenca Riachuelo), entre otras celebradas ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en términos de las modernas corrientes que propugnan por una "justicia dialógica".

De tal modo, las partes en la acción podrán exponer sus posiciones y argumentos en torno al asunto debatido en autos. Además, tal tipo de audiencia podría resultar novedosa y fundante en la jurisdicción -donde no se registran antecedentes similares-, y útil para el Tribunal al momento de dictar la resolución que por derecho corresponde.

VI. PROPONGO MEDIDAS

Solicito se practiquen las siguientes medidas en autos, las que el Tribunal puede arbitrar en los términos de los arts. 32 LGA, 2 de la CADH y concordantes del C.P.C.N. (art. 36), todas ellas entiendo pueden coadyuvar a dirimir el caso de autos. Así:

1) Llamar al proceso a *amici curiae* (ver Ac. C.S.J.N. Nº 7/2013 y cc.). Dadas las particulares circunstancias que rodean al caso, será útil para elucidarlo la opinión de especialistas reconocidos en la materia, que en forma objetiva coadyuven con sus conocimientos a la resolución que tome el Tribunal. También pueden dictaminar, eventualmente, en los términos del art. 33 y cc LGA.

2) Encuesta socio ambiental e inspección ocular: para que el Tribunal se constituya in situ, y de visu pueda comprobar extremos sostenidos por los actores en su demanda. Se trata de una medida factible y sencilla, toda vez que el lugar en cuestión se encuentra a una distancia bastante cercana a la sede del Tribunal.

3) Que se soliciten **informes y dictámenes** a instituciones que, por su prestigio, releven las condiciones del lugar y coadyuven con su opinión para dilucidar el caso y pronunciarse sobre daño e impacto ambiental (en aire –degradación y afectación sonora-, tierra y agua de la zona). Ello así, en los términos de los **arts.** 33 y cc. LGA. En concreto, propongo se convoque a las Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba y Tecnológica Nacional



(Delegación Córdoba); como también a aquellas de reconocida trayectoria en la temática que nos ocupa, como las universidades nacionales de La Plata y del Litoral.

VII. RESERVA DE CASO FEDERAL

A todo evento, mantengo reserva de caso federal, oportunamente planteada por este Ministerio Público en autos.

VIII, PETITORIO

A mérito de lo colacionado, al Señor Juez pido:

- Tenga presente lo manifestado, formule la aclaración que se plantea, provea la presentación de fs. 1155/6, y confiera nueva vista;
- Tenga presente los hechos públicos y notorios, cuya divulgación periodística acompaño en copias;
- 3) Por contestada la vista ordenada a fs. 1165;
- 4) Por repuesto el decreto de fs. 1167, en su parte pertinente,
- Tenga presente el carácter de intervención en autos, y oportunamente ordene vista del traslado de fs. 1167,

sin perjuicio de las manifestaciones expresadas en este dictamen sobre el particular;

- 6) Por pedida audiencia (art. 36 C.P.C.N., conforme pautas de la Ac. C.S.J.N. N° 30/2007).
- 7) Por requeridas medidas,
- 8) Por mantenida cuestión federal;Provea de conformidad, SERA JUSTICIA

MARIA MERCEDES CRESS

